



SENTENCIAS CONSTITUCIONALES SOBRE LA MUERTE DIGNA

José Miguel Serrano

Resumen: La sentencia comentada ha sido considerada como relevante en la discusión sobre el derecho a la vida en relación con la eutanasia. Sin embargo, las peculiaridades del caso que le dio origen y la propia argumentación del tribunal la alejan de una interpretación relevante en torno a los dos tópicos del derecho a la vida y de la dignidad. Por el contrario, la sentencia resulta decepcionante en su argumentación más propia. Primero, respecto a la propia huelga de hambre, que condena sin matices en relación con su intencionalidad política, lo que crea la paradoja de que se consideraría más digno de respeto el suicidio estricto. Igualmente, es criticable el argumento que se maneja sobre la peculiar relación del interno respecto a la administración penitenciaria, lo que parece facultar una limitación de derechos muy discutible: primero, por entenderse que de no existir esa relación habría una obligación estricta de abstención del médico que no puede aceptarse sin matices; también, en cuanto parece excluir en virtud de la sujeción el consentimiento informado. Sin embargo, se acierta al distinguir entre alimentación forzosa y atención médica indispensable una vez perdida la consciencia.

La jurisprudencia constitucional española tiene dos sentencias en donde se trata el problema de la alimentación asistida. No está claro que sean determinantes en la definición del contenido del derecho a la vida, ni en la definición de la dignidad. Menos aún es ilustrativo para la eutanasia, aunque se han citado abundantemente en la polémica. Se trata de la Sentencia 120/1990, de 27 de

junio y de la 137/1990, de 30 de julio. Probablemente, el efecto constitucional más controvertido se refiere a su contundente declaración de que “La libertad de rechazar tratamientos terapéuticos como manifestación de la libre autodeterminación de la persona, no puede entenderse incluida en la esfera del art 17, 1 CE”. Afirmación de carácter fundamentalmente procesal, destinada a reducir la presión sobre el propio Tribunal.

Estas sentencias se pronunciaron con motivo de los recursos promovidos por los abogados de unos terroristas del GRAPO— en huelga de hambre en protesta contra las condiciones penitenciarias— y con motivo de la alimentación asistida que se les suministró. Por un lado, los miembros de la banda asesina, aún en actividad en aquellos momentos, pretendían limitar la facultad de acción de la política penitenciaria en relación con la lucha antiterrorista. Por otro, se dilucidaba si la Administración penitenciaria, decidida a no ceder a la presión, debía permanecer como mera espectadora de la posible muerte de los reclusos. La discusión se ve perturbada por el hecho de que afecta a la huelga de hambre como forma de resistencia, cuestión de enorme debate en los últimos años. Es de destacar que el derecho a la huelga de hambre se ha interpretado como último recurso del preso frente al totalitarismo y, por tanto, no es irrelevante que el supuesto derecho se ejerza por el preso terrorista totalitario frente al Estado legítimo, que garantiza la tutela judicial efectiva del condenado y una legislación penitenciaria adecuada. En todo caso, la violación de derechos humanos la realizó la organización terrorista sobre los médicos implicados¹.

1. La íntima contradicción entre resistencia civil admisible y terrorismo, entre el método terrorista y la huelga de hambre, ha sido señalada con acierto por María José FALCÓN. Así respecto al terrorismo afirma: “Como dice Mac Guigan, el terrorismo recibe su nombre de ‘terror’ que trata de imponer, usando medios fuera de lo normal, como las amenazas y la violencia. Lo que busca el objetivo próximo del terrorismo, es la desorientación general de la población, la destrucción del entramado social, el aislamiento del individuo, no de-

El propio enfoque del Tribunal se ve desplazado, en cuanto tiene que lidiar con la reclamación de un derecho a la muerte por parte del sujeto, en relación con el derecho a la propia vida. Sin embargo, no es de esto de lo que se trata en una huelga de hambre. Ésta, en principio, aparece como un último recurso de resistencia del preso, normalmente ligado a la reivindicación de la condición política de su prisión y de su protesta ante un determinado cambio de situación. Tiene su raíz en la tradición revolucionaria rusa y su resistencia ante el Estado autoritario zarista. El preso presiona mediante la huelga al gobierno, o más directamente a la Administración penitenciaria, consciente de la capacidad de presión de la opinión pública, ya sea nacional o internacional. Por ello, la huelga de hambre tiene una tradición de respeto que no está vinculada ni a la consideración del derecho a la propia muerte, ni, desde luego, a la situación de tratamiento debido de la hidratación y alimentación

jándole nada en lo que apoyarse para quien sienta angustia y ansiedad al ver que las normas e instituciones existentes son incapaces de controlar la situación. Es precisamente el carácter simbólico e indiscriminado de la acción terrorista lo que la priva de toda justificación teórica en una democracia. Peor, el mayor vicio del terrorismo es el uso de personas individuales como meros símbolos, prescindiendo de sus características individuales. La gente se convierte en un simple medio al servicio de la desorientación y la destrucción social". *La desobediencia civil*, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 100. Lo contrario ocurre con las huelgas de hambre, que históricamente, a través de la figura de Ghandi, han venido unidas a las tácticas de desobediencia civil. Sus orígenes más remotos se encuentran en la liberación de la India, donde se denominaba ayuno. El ayuno constituía una forma de hacer sentir la injusticia de la dependencia de la patria de un poder extranjero. Pero dicha táctica tenía también un cariz religioso: en la religión hindú el ayuno constituyó siempre una penitencia y una plegaria. Por eso cuando el hindú en su intento de liberación de su país ayunaba, en realidad, estaba sacrificándose y rogando a Dios por la liberación de su pueblo, ofreciendo así un testimonio capaz de encontrar seguidores y de hacer tambalearse al propio poder. Otra manifestación de la huelga de hambre es la realizada, por ejemplo, por los presos dentro de una cárcel, siendo en este caso suficientes para otorgar la publicidad inherente a toda desobediencia civil, que sea conocido el hecho a través de los medios de comunicación, op. cit., p. 104.

parenteral. En Occidente, goza de buena fama como exponente máximo de la resistencia pacífica a la orden injusta. Es de destacar, que la presencia de opinión pública es fundamental en la huelga de hambre. De ahí su ineficacia en el Estado propiamente totalitario. Quienes la intentaron contra sus viejos camaradas soviéticos se dieron pronto cuenta del cambio de situación. La huelga de hambre en un contexto de miles de asesinatos no pasaba de una indisciplina que se resolvía generalmente a golpes. Al no alcanzar la publicidad se transformaba en un gesto vano aunque ciertamente encomiable². Es muy relevante considerar, por tanto, que la vinculación entre huelga de hambre y derecho a la muerte no es pertinente. La negativa a comer es una acción desesperada, aceptable en un contexto en el que no hay otro modo de hacer visible la resistencia al poder injusto. En estas circunstancias, la discusión sobre la huelga de hambre de presos terroristas debe cambiar de enfoque. En primer lugar, el Estado democrático tiene la obligación, salvo que quiera poner en entredicho su legitimidad, de negarse a reconocer la condición de “políticos” o presos de

2. La huelga de hambre de los socialistas contra los bolcheviques se describe de la siguiente forma por Solzhenitsyn: “Y he aquí que los tres eremitarios donde estaban confinados los socialistas...fueron capaces de ponerse de acuerdo a escondidas. El plazo del *ultimatum* era de dos semanas y en caso de negativa, las tres ermitas se declararían en huelga de hambre...Una huelga de hambre sólo tiene sentido si existe una determinación implacable, si cada hombre conoce personalmente a los demás y está seguro de ellos...Las ermitas cesaron la huelga. Por tanto no alcanzaron ninguna victoria. Pero según se vio después tampoco habían perdido... Hacia el año 1928 (según cuenta Piotr Petróvich Rubin), hubo algún motivo que provocó una nueva huelga de hambre colectiva de todo el izoliator de Verjne _Uralsk. Pero ahora, ya no había esa atmósfera rigurosa y solemne, ni el aliento de los compañeros, ni la atención de un médico propio. Un día, en plena huelga de hambre, los carceleros irrumpieron en las celdas en número muy superior al de los reclusos y la emprendieron a estacazos y patadas contra aquellos hombres debilitados. Los apalizaron a conciencia y se terminó la huelga de hambre”. *Archipelago Gulag*, tomo I, Tusquets, Barcelona, pp. 547-548.

guerra a los criminales que intentan imponer su ideología mediante el terror. Esto no resuelve, sin embargo, la cuestión de si alimentar de forma artificial al preso desfallecido es, o no, imponerle la alimentación forzosa; lo que parece a juicio de muchos como una invasión de la intimidad. Tampoco afecta a la cuestión de la indicación de la hidratación como cuidado debido, respecto a personas que se encuentran en otra circunstancia. Por supuesto, para quienes reconocen legalmente la posibilidad de negarse a este tipo de alimentación, todo el debate parece superado. Si alguien afirma con claridad su deseo de no ser alimentado no debería serlo; esta es la vía, por ejemplo, que se siguió en el caso Schiavo, aunque con la novedad de suponer esta negativa a partir de pruebas que no eran en modo alguno concluyentes.

La cuestión es ardua y dista de estar resuelta. Por ejemplo, el debate se ha reabierto en Estados Unidos en relación con los presos de Guantánamo. La alimentación asistida, para algunos forzosa, se ha discutido en este contexto, con un número relevante de voces médicas negándose a que sea ético participar en esta actividad ante huelgas de hambre en el campo de prisioneros. El asunto es difícil pero podemos preguntarnos si, en caso de que los prisioneros no estuviesen en el limbo jurídico en el que están situados en esa base militar, sin acceso pleno al sistema jurídico estadounidense, la actitud crítica sería tan relevante. Las dudas sobre la situación en la que se encuentran, privados de derechos y de recursos jurídicos normales, incide indudablemente en la consideración de su huelga de hambre como último recurso.

Por otra parte, quien recurre a la huelga de hambre, como quien arriesga su vida por otro, o se niega a un tratamiento por razones de conciencia, no tiene una intención suicida. No se debate su derecho a la muerte sino su derecho a no ser alimentado contra su voluntad.

Por todo ello, el caso contemplado no permite avanzar en ningún sentido de la consideración del medio de la alimentación

como fútil o no, pues precisamente se inició en el convencimiento de que no lo era en este caso.

Creo sinceramente que en la sentencia subyace el deber deontológico de atender al enfermo por un medio que se considera indicado; sin embargo, estoy de acuerdo en que la línea de argumentación es totalmente equivocada. En efecto, la sentencia soluciona el aparente problema refiriéndose al especial deber de cuidado de la Administración penitenciaria sobre el preso. Este deber se traduce en la legislación penitenciaria en la prohibición de experimentación con presos, por ejemplo, aunque prestasen su consentimiento voluntario. Esta protección, sin embargo, en la argumentación del Tribunal parece una reducción de derechos, pues aunque niega el derecho a la muerte, justifica la intervención sólo en el caso de los presos, con lo que parece que la protección es realmente una reducción de sus derechos subjetivos. De ahí que algunos, mientras critican la decisión final, sostengan que no afecta al general derecho a la muerte.

Por otra parte, la argumentación sobre el suicidio es igualmente equívoca. Frente a lo que parece deducirse, la tendencia a no sancionar a quien intenta el suicidio afecta fundamentalmente al sentido de la sanción y a los fines del derecho penal, no a una opinión sobre la abstención del Estado ante quien intenta matarse. De hecho, así se justifica que se sancionen con severidad los actos conexos y, como hemos dicho, esto no es en modo alguno una contradicción sino una actitud penal hacia las circunstancias de una persona, que realiza un acto que se considera desesperado y respecto al que se actúa con energía para impedirlo o recuperarlo cuando esto es posible.

Si analizamos el caso que sirve de base a toda la argumentación, observaremos diversos tipos de conducta. Una es la de quienes alimentaron, considerando que ese era su deber profesional, y fueron luego víctimas de la acción criminal como represalia. Se trata de un martirio en aras del compromiso adquirido, en defensa de la libertad cívica, que nadie puede, ni debe, olvidar al tratar

el caso. Para estos, nuestra admiración y reconocimiento. Otro, es el del Estado, más complejo. Puede que buscarse el bien de tutela, pero su acción se ve afectada por la sospecha de su temor a las consecuencias políticas que se derivarían de aceptar que los criminales muriesen como consecuencia de su actitud. Finalmente, el GRAPO, la organización criminal a la que pertenecían los huelguistas, cumplió sus amenazas homicidas; es decir, frente a la resistencia exaltada del huelguista de hambre la máscara apenas encubre el designio criminal. El derecho a la vida, finalmente en juego, fue el de los médicos, triste paradoja de todo el caso.

El primero, y más importante, de los derechos constitucionales tratados se refiere a la naturaleza del derecho a la vida del artículo 15 de la Constitución española, en conexión con el derecho a la integridad física y moral garantizado en el mismo artículo; para inclinarse a considerar que no puede deducirse que exista un derecho subjetivo a la propia muerte garantizado en la Constitución³. Respecto a éste dice el Tribunal que el derecho a la vida “tiene un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte. Ello no impide, sin embargo, reconocer que siendo la vida un bien de la persona que se integra en el círculo de su libertad, pueda aquélla tácticamente disponer sobre su propia muerte, pero esa disposición constituye una manifestación del *agere licere*, en cuanto que la privación de la vida propia o la aceptación de la propia muerte es un acto que la ley no prohíbe y no, en ningún modo, un derecho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público para vencer la resistencia que se oponga a la voluntad de morir, ni, mucho menos, un derecho subjetivo de carácter fundamental en el que esa posibilidad se extienda incluso frente a la resistencia del legislador, que no puede

3. Ana María MARCOS DEL CANO, *La eutanasia. Estudio filosófico-jurídico*, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 153.

reducir el contenido esencial del derecho”. Por eso el Tribunal insiste en que “no es posible admitir que la Constitución garantice en su art. 15 el derecho a la propia muerte y, por consiguiente, carece de apoyo constitucional la pretensión de que la asistencia médica coactiva es contraria a ese derecho constitucionalmente inexistente”. La cuestión que se abre indudablemente es la de la dignidad y no la del derecho a la muerte. Esta negativa es tan reiterada en los tribunales de nuestro entorno como rechazada por algunos teóricos, por ejemplo Atienza. Sin embargo, este autor sí observa como la argumentación de los tribunales cierra el camino a un derecho a la eutanasia: “Si aceptamos que el derecho a la vida recogido en la Constitución debe interpretarse en el sentido del primer modelo indicado, entonces tendremos que aceptar también que la Constitución prohíbe toda forma de eutanasia (tanto la no voluntaria como la voluntaria, tanto la activa como la pasiva), en cuanto que la eutanasia presupone, en efecto, que un individuo tiene derecho a morir”⁴. En consecuencia, para justificar su derecho a la eutanasia, contra la literalidad e interpretación de la ley, se ven obligados a recurrir a un derecho natural de base en la autonomía, un derecho a la propia muerte que se impone a las consideraciones estrictamente jurídicas.

Me temo que el Tribunal entra en una clara aporía. La primera parte del razonamiento del Tribunal, es decir, “tiene...” parece muy correcta. Hasta ahí muy bien. Pero a continuación se produce un razonamiento equívoco inscrito en la segunda parte del párrafo: “Ello no impide...”.

Si esto es así, no habría forma de justificar la intervención en favor de la vida de una persona que quiere privarse de ella, es decir, toda la práctica de impedir suicidios, de recuperar suicidas, se vería en riesgo pues no se pide en ellos el ejercicio de un derecho subjetivo sino que se atiende a su voluntad a la hora de juzgar de

4. Manuel ATIENZA, *Tras la Justicia*, Ariel, Barcelona, 1993, p. 106.

forma penal la acción de terceros⁵. Es más, en cuanto a lo que se resuelve la aporía es enorme, pues de lo que se trata es precisamente de una intervención de un medio como la alimentación artificial, que en buena parte del derecho comparado se considera sujeto al consentimiento informado; algo diverso del reconocimiento del derecho a morir.

La argumentación, desde mi punto de vista, peca de un desenfoque de partida. La no penalidad del suicidio, respecto exclusivamente a la figura del suicida, no implica una concepción sobre el acto y su autonomía como pretenden los radicales, pues en ese caso si sería incoherente sancionar el auxilio y la provocación, sino una concepción sobre la pena que se considera inaplicable al suicida, por razones que están vigente entre nosotros desde la Ilustración, especialmente en las obras de Voltaire y Beccaria. En otras palabras, no es cierto que el Estado, indiferente ante la acción suicida, lo incluya en la esfera del *agere licere*, sino que opta por buenos criterios con no sancionar al suicida, tras poner todos los obstáculos para la realización de esa acción y el auxilio a la misma. Entre otras razones, por cuanto se piensa que el suicidio no es un acto libre tal como comprueban las estadísticas que lo vinculan estrechamente a situaciones de enfermedad mental y toxicomanías. Sorprende que se acepte jurídicamente una posición “filosófica” sobre el suicidio sin atender a las situaciones reales que subyacen a este acto, por ejemplo, en España.

Fruto de esta presunción errónea es la deriva del resto de la argumentación. Probablemente sin quererlo, el Tribunal produce la impresión de que sería más aceptable el suicidio de voluntad inmotivada que el riesgo de la propia vida como fruto de una decisión, por ejemplo, moral. Véase si no el siguiente párrafo: “Además, aunque se admitiese la tesis de los recurrentes, tampoco podría apreciarse que, en el caso contemplado se produce vulne-

5. Andres OLLERO, *Derecho a la vida y Derecho a la muerte*, Rialp, Madrid, 1994.

ración de ese pretendido derecho a disponer de la propia vida, puesto que el riesgo de perderla que han asumido no tiene por finalidad causarse la muerte, sino la modificación de una decisión de política penitenciaria que tratan de obtener incluso a expensas de su vida”.

Fruto de esto es la vuelta sobre toda a la argumentación tradicional, al menos de los siglos XIX y XX, sobre la huelga de hambre. Esta se distinguía del suicidio por la intencionalidad política que la convertía en respetable. Para nuestro Tribunal es esta intencionalidad la que, frente al suicidio, hace precisamente rechazable la huelga de hambre en cuanto se autoriza la alimentación forzosa.

El argumento se expresa con nitidez “en tal sentido, una cosa es la decisión de quién asume el riesgo de morir en un acto de voluntad que sólo a él afecta (en cuyo caso podría sostenerse la ilicitud de la asistencia médica obligatoria o de cualquier otro impedimento a la realización de esa voluntad) y cosa bien distinta es la decisión de quienes hallándose en el seno de una relación especial penitenciaria, arriesgan su vida con el fin de conseguir que la Administración deje de ejercer o ejerza de distinta forma potestades que le confiere el ordenamiento jurídico, pues en este caso la negativa a recibir asistencia médica sitúa al Estado, en forma arbitraria, ante el injusto de modificar una decisión, que es legítima mientras no sea judicialmente anulada, o contemplar pasivamente la muerte de personas que están bajo su custodia y cuya vida está legalmente obligado a preservar y proteger”.

El propio Atienza, crítico con la argumentación del Tribunal en un sentido diverso al nuestro, resume las posiciones del gobierno en tres líneas de argumentación.

La primera es “que el derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte”⁶.

6. Manuel ATIENZA, *Tras la Justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico*, Ariel, Barcelona, 1ª ed, 1993. pp. 117 y ss.

La segunda se refiere a que los presos no usan la libertad para conseguir fines lícitos, sino para conseguir una modificación de una decisión lícita, lo que fuerza al Estado a plegarse o a observar inerte la muerte de los internos. Rodríguez-Piñero revela igualmente la inconveniencia de este argumento. En su voto particular afirma que, “Además, no me parece convincente el argumento adicional utilizado para negar la libertad de los recurrentes de oponerse a la asistencia médica obligatoria durante el ejercicio de su huelga de hambre, y consistente en contraponer la libertad para conseguir fines lícitos, respecto del uso de esa libertad en relación con objetivos no amparados por la ley”.

El tercer argumento, que como vimos se utiliza para trazar la diferencia entre abstención lícita, que sería respecto al ciudadano “normal” y la obligación respecto al preso, que se ve alterada por la relación especial de sujeción respecto a la Administración. El problema que enfoca acertadamente el voto particular de Rodríguez-Piñero a la Sentencia 120/19990, es si la oposición a un determinado tratamiento médico justificable en el ciudadano o paciente “normal” está limitada por la situación del preso; máxime cuando no parece explícitamente recogida en la sanción penal, que debe interpretarse en sentido restrictivo. Considerando el posterior desarrollo legislativo de la protección de la autonomía del paciente y del consentimiento informado, conviene recordar que la línea de interpretación restrictiva por la situación de especial sujeción no ha sido seguida por el legislador. Las razones de obligación de determinados tratamientos ligadas a la salud pública, por ejemplo, en casos de epidemia no se fundamentan, ni entre nosotros ni en el derecho comparado en la especial sujeción sino en los riesgos para el conjunto del grupo o de la sociedad en su conjunto.

De nuevo con este discrepante, “La razón principal de mi discrepancia es la que, según la opinión mayoritaria del Pleno, la relación de sujeción especial del penado y, más genéricamente del interno, frente a la Administración penitenciaria justificaría la im-

posición, que habría de calificar de especial, de una limitación de los derechos fundamentales como la que supone la alimentación forzosa”.

Debe destacarse que la mayoría no cree que estrictamente nos encontremos ante un caso de alimentación forzosa, cuestión sobre la que volveré más adelante.

Parece que en consecuencia el Tribunal se preocupa más por los problemas que se le crean a la Administración penitenciaria que por la delimitación del derecho a la vida que se aborda de una forma descuidada. Aún, si se tratara de delimitar las competencias estatales, el asunto sería más correcto, pero es de temer que la resolución se ha centrado más en evitar problemas políticos con los presos terroristas, que en abordar una reflexión relevante sobre las cuestiones implicadas.

Éstas serían al menos las siguientes. Primero, la fundamentación del derecho a la vida que no puede centrarse en la valoración del propio sujeto, salvo que se pretenda caer en aporías.

Kass ha analizado de forma muy brillante las tres justificaciones que suelen manejarse respecto a la protección de la vida humana como exigencia del Derecho⁷. En lo que concierne a la primera, es decir la fundamentación del orden político, es indudable que el orden social se basa entre nosotros en la proscripción del homicidio, hasta el extremo de que Hobbes lo sitúa en el origen y justificación, en consecuencia, de todo el orden social. Cuando éste no garantiza la vida de los miembros de la comunidad, sencillamente, entra en crisis.

Los pensadores clásicos del liberalismo fundamentan así el derecho a la vida, irrenunciable, en cuanto sin él no cabe el ejercicio de ningún derecho. Aparece como el primer derecho natural, que no encuentra correspondencia con un derecho igual no tan sólo a ser eliminado sino a eliminarse. El derecho a la vida no tie-

7. Leon R. KASS, *Life, Liberty and the Defense of Human Dignity*, Encounter Books, San Francisco, 2002, pp. 212 y ss.

ne un correlato en un derecho a la muerte frente a la tendencia natural a la autopreservación. Posteriormente, Kant, al definir la autonomía, excluye expresamente el suicidio por ser un querer contrario a la propia racionalidad, incapaz de definir a un sujeto autónomo. A pesar de ello, es notorio que en la retórica eutanásica hay una permanente referencia a la autonomía.

El orden social depende del mantenimiento de la paz y ésta, a su vez, remite al estricto cumplimiento del principio: no debes asesinar. Ahora bien, el tabú del homicidio no se fundamenta esencialmente en el orden social, al menos en nuestra cultura; en cuanto, como hemos visto, la justificación de la propia comunidad reside en la protección de la vida de sus miembros. Como ha expresado Kass, la sociedad civil existe para preservar los bienes implícitos en el tabú del homicidio al menos en la misma medida en que el tabú del homicidio protege la existencia de la vida social.

Abordaremos, a continuación, la segunda justificación de la protección del derecho a la vida. En principio, por valiosa que sea toda vida para la comunidad, cada vida es valorada primariamente por quien la detenta. De esta obviedad algunos derivan que la vida es valorada en cuanto precisamente subyace a ella una voluntad de vivir. De esta forma podría deducirse que el homicidio es malo por que se opone a la voluntad de vivir de la víctima. Este argumento es válido en algunos casos, piénsese en una pelea consentida de boxeo; aunque no en todos, pues podemos describir enfrentamientos mutuamente consentidos en los que no se elimina, por ejemplo, la sanción por las lesiones. Es más, como indica el autor americano, las prácticas más abominables de la humanidad como el incesto o la antropofagia no cambian su carácter por el consentimiento. En definitiva, la cuestión debe plantearse sobre si la vida del hombre debe protegerse porque la sociedad o el mismo le dan valor, o en cuanto es valiosa en sí misma.

En nuestra tradición, el valor de la vida humana es intrínseco en cuanto sus cualidades son imagen de Dios. Esto hace que en la

argumentación actual se considere que la referencia a la sacralidad es religiosa y, por tanto, rechazable en la fundamentación de la legislación civil.

Esta postura obligaría a nuestro juicio a rechazar una profunda base antropológica, independientemente del mandamiento de las tablas, o del establecimiento en el pacto tras el diluvio con Noé de la sanción del homicidio; la justificación se basa en la existencia de cualidades que se atribuyen al hombre en cuanto es imagen de Dios. Póngase entre paréntesis esta imagen divina y seguiremos encontrando las cualidades propias del ser humano. Seguirá siendo libre, teniendo voluntad, capaz de amar, del goce estético o del conocimiento. Las razones de dignidad que atribuía Cicerón frente a los animales seguirían estando ahí. La vida humana, siendo valiosa, no puede ser eliminada.

Debemos tener en cuenta que la peculiaridad del caso lo aleja de la discusión habitual sobre la dignidad y el derecho a morir, tal como se plantea en el debate social de los últimos años. En éste, la cuestión principal es si toda vida humana es digna o si debajo de un determinado umbral de calidad la exigencia de la muerte es contenido de un derecho precisamente a la dignidad de la muerte. Por ello, la pretensión de las partes recurrentes es tan equívoca. Morirse cuando uno quiere, sin interferencia de nadie, no es derecho a la muerte digna. Como ha indicado Keown, el juego de la eutanasia, que no está aquí presente, requiere dos elementos: uno objetivo, la calidad de vida juzgada por el legislador; y otro subjetivo, el deseo de morir. El primero se compadece mal con la acción militante de quien actúa sobre su vida para forzar una decisión política. Frente a la argumentación radical, no se ha aceptado por ninguna legislación, menos por tanto puede derivarse de un derecho constitucionalmente reconocido, que el Estado, los servicios médicos o los sociales tengan una obligación de abstención ante la decisión de cualquiera de matarse; y ello aunque el argumento de la sentencia concede en este campo mucho más de lo que debiera, en virtud de su obcecación en distinguir la condición dependiente del preso.

Pero, por otra parte, la posición del Tribunal podía haberse basado, en lo que se refiere a la situación abordada, en otro tipo de justificaciones. Imaginemos que se accede a la valoración de que la vida del preso es indigna en la consideración pública. ¿Cual sería entonces la posición de todo el sistema penal respecto a los privados de libertad? De aceptarse este razonamiento, las Administraciones penitenciarias se encontrarían en la posición de los campos de concentración nazis, en donde, como indica Frankl, se prohibía terminantemente intervenir para frenar un suicidio⁸.

El tópico de la dignidad está en el centro del debate eutanásico. De hecho lo está en todo el debate bioético. La razón parece clara. En uno de los textos clave sobre derechos humanos entre nosotros, como es la Convención de Estrasburgo para la tutela de los derechos del hombre y la dignidad del ser humano, se hace una especial referencia a la dignidad humana. A través de esta referencia, el derecho se remite a un concepto que reconoce la sacralidad de la vida humana. Este concepto parte de una intuición básica y de una tradición, sin la que elementos fundamentales de nuestra organización social, sencillamente, quedan sin apoyo que los sustente.

Habría que explicar, sin embargo, cómo es que un concepto, que encuentra su explicación en una tradición muy determinada y que en virtud de esa tradición ha tenido su traducción legislativa en las declaraciones de Derechos Humanos y en las denominadas Constituciones de postguerra, puede ser utilizado en dos sentidos: tanto para afirmar la sacralidad de la vida humana, como para justificar la eutanasia.

Se trata, en consecuencia, de uno de los argumentos decisivos tanto de las posturas preutanásicas, que se justifican en la denominada muerte digna, como de las posturas provida, que hacen referencia a la dignidad del moribundo y del sufriente para oponerse a su eliminación, incluso cuando él mismo la demanda.

8. Victor E. FRANKL, *El hombre en busca de sentido*, Herder, 20ª ed., Barcelona, 1999.

Para complicar la cuestión, sí parece que ambas nociones permiten definir como indigno un tipo determinado de muerte. La que se produce en la denominada distanasia, fruto del ensañamiento terapéutico.

Debemos considerar, además, que la presencia de la dignidad en la argumentación proeutanasica no es tampoco pacífica. En efecto, en el inicio de la lucha por la legalización de la eutanasia en el siglo veinte, el acento estuvo situado en la existencia de vidas carentes de valor vital; es decir, indignas. Esta brutal distinción entre los sujetos humanos, dignos e indignos, tuvo graves consecuencias en el Tercer Reich y no es aventurado señalar que la presencia del concepto de dignidad en las Constituciones de Postguerra, especialmente en la Ley Fundamental de Bonn, estaba centrada en evitar que se pudiera considerar a determinados hombres como carentes de dignidad.

La reconstrucción de la argumentación en los años sesenta es significativa. Incluso la Asociación norteamericana eliminó el término eutanasia, para pasar a denominarse con el término Derecho a la muerte digna. La forma de abordar la cuestión se ve influida, como ha señalado con acierto León Kass, por la cultura de los derechos que explosiona en los años sesenta de forma que tal como el aborto se defendió desde la perspectiva del derecho a la *privacy* de la madre, la eutanasia se concibe como un derecho que se concede a quien la solicita, como un legítimo ejercicio de su autonomía, aunque paradójicamente en el momento en el que es menos autónomo⁹. El derecho que se concede lo sería al hombre digno para evitar una situación en la que paradójicamente ya no es digno. De esta forma, en la explicación del discurso nos encontramos con una argumentación de raíz subjetivista que tiene el efecto de superar en nombre de la dignidad la función jurídica del propio concepto de dignidad.

9. Leon KASS, *Life, liberty and the Defense of Dignity*, Encounter Books, San Francisco, 2002, p. 203.

Para acabar de complicar la cuestión, la argumentación más radical, de tinte utilitarista, a favor de la eutanasia deconstruye el concepto de dignidad por considerarlo especificista, es decir, una valoración indebida del hombre realizada por los miembros de la propia especie, en virtud de un prejuicio similar al que marco la discriminación en virtud de la raza o del género.

Desde esta perspectiva, se puede considerar que la referencia a la dignidad en la argumentación proeutanáica es desconcertante y, nos atrevemos a añadir, sospechosa.

En principio en el debate se enfrentan dos nociones de dignidad humana muy distintas. Gonzalo Herranz las ha caracterizado con las siguientes notas:

La primera “proclama la dignidad intangible de toda la vida humana, incluso en el trance de morir; todas las vidas humanas, en toda la duración, desde la concepción hasta la muerte natural, están dotadas de una dignidad intrínseca, objetiva, poseída por igual por todos; esa dignidad rodea de una aura de nobleza y sacralidad inamisibles todos los momentos de la vida del Hombre”.

En la posición proeutanáica se encontraría un concepto diametralmente opuesto: “La otra afirma que la vida humana es un bien precioso, dotado de una dignidad excelente, que se reparte en medida desigual entre los seres humanos, y que, en cada individuo, sufre fluctuaciones con el transcurso del tiempo, hasta el punto que puede extinguirse y desaparecer; la dignidad consiste en calidad de vida, en fundada aspiración a la excelencia. Cuando la calidad decae por debajo de un nivel crítico, la vida pierde su dignidad y deja de ser un bien altamente estimable. Sin dignidad, la vida del hombre deja de ser verdaderamente humana y se hace dispensable: esa vida ya no es vida. Entonces, anticipar la muerte es la solución apetecible cuando la vida pierde su dignidad”¹⁰.

10. Gonzalo HERRANZ, *Eutanasia y dignidad del morir*, comunicación en las Jornadas “Bioética y dignidad en una sociedad plural”, Universidad de Na-

En el contexto proeutánico, la dignidad se relaciona con control sobre el proceso vital y con la apreciación de que la situación indigna afecta a la condición intrínseca del sufriente. Como afirma el profesor de la Universidad de Navarra: “El proyecto ideológico que subyace a la mentalidad con dignidad o del derecho a una muerte consiste en la aceptación de que la dignidad humana es minada, o incluso alevosamente destruida, por el sufrimiento la debilidad, la dependencia de otros y la enfermedad terminal. Se hace, por tanto, necesario rescatar el proceso de morir de esas situaciones degradantes mediante el recurso a la eutanasia o al suicidio ayudado por el médico”¹¹. De aquí surge el derecho a la muerte como alternativa. La proposición de ley orgánica de despenalización de la eutanasia presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida argumentaba en su exposición de motivos que “El derecho del hombre a una muerte digna está directamente relacionado con el derecho a una vida digna, por ello cuando causas de naturaleza médica impiden al ser humano desarrollar su vida propia, o le pongan en situación de fuerte menoscabo de su dignidad como persona, o le supongan padecimientos físicos permanentes e irreversibles, hacen que se deba dar la oportunidad de poner fin a una vida digna desde el punto de vista de quien decida”¹².

varra, octubre 1999. Editado en *Vivir y Morir con dignidad*, Eunsa, Pamplona, 2002, p. 174.

11. Gonzalo HERRANZ, op. cit., p. 183.

12. Boletín del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1998. Esta proposición pretendía redactar el artículo 143 del Código Penal de forma que no cometiera delito alguno quien matase a otro a petición expresa, inequívoca y sería de éste, siempre que se cumpliera alguna de estas condiciones: que la petición conste en documento público, que medie dictamen facultativo que constate la situación del paciente, que éste sufriese enfermedad grave que condujera necesariamente a la muerte tras graves padecimientos físicos o psíquicos o que padeciese enfermedad crónica que produjera los mismos padecimientos. La proposición incluía igualmente la eutanasia en caso de pérdida de consciencia insuperable, con reducción absoluta de sus facultades vitales autónomas, a petición de familiares en primer grado o representante legal.

Otra cuestión que podía haber abordado nuestro Tribunal fue la diferencia entre el suicidio en sentido estricto, o la eutanasia en cuanto acto homicida, y la negativa al tratamiento médico. Mucho pudo decir sobre la autonomía, fuese del preso o del paciente en condición de libertad. Este es el primer sentido de la discrepancia de Rodríguez Piñero cuando afirma: “Y en el que la diversidad y la contraposición de posturas en la doctrina se corresponden con la evolución vacilante y acelerada de la deontología médica en relación la voluntariedad de los tratamientos terapéuticos y los derechos fundamentales del enfermo”. Incluso pudo acercarse a la cuestión de la relación entre la alimentación asistida, cuando no hay otra causa médica que actúe sobre el sujeto, y la autonomía.

Y es que el Tribunal manifiesta su acierto al plantear la diferencia entre asistencia médica con paciente en una fase desfalleciente y alimentación forzosa. En esto sigue una diferenciación establecida desde la primera decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Soria de 20 de diciembre de 1989 en el que se disponía: “mándese oficio al Centro Penitenciario de Soria, y con respecto a la huelga de hambre mantenida por parte del colectivo GRAPO para que en el momento, y a criterio médico, de que corra algún peligro de muerte cualquiera de los participantes de dicha huelga, se les de tratamiento médico necesario aún en contra de su voluntad”.

Más adelante la Audiencia Provincial de Madrid matiza la resolución indicando “el derecho-deber de la Administración Penitenciaria de suministrar asistencia médica, conforme a criterios de la ciencia médica, a aquellos reclusos en huelga de hambre una vez que la vida de éstos corra peligro, lo que se determinará previo los oportunos informes médicos, en la forma que el Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente determine, y sin que en ningún caso pueda suministrarse la alimentación por vía bucal en tanto persista su estado determinarse libre y conscientemente”.

En el punto seis se centra esta cuestión, que desde nuestro punto de vista afecta a la obligación asistencial común, cuando una persona se encuentra en una situación desfalleciente, sometida a tratamiento médico, sin otro mal que el derivado de su empeño en no alimentarse. La alternativa que se baraja es evidentemente la total ausencia de tratamiento por una voluntad antes manifestada. Se parece en cierta forma a las dudas que plantea en otros contextos la recuperación del suicida; es decir, su atención cuando se tiene la clara conciencia de que quería morir. En palabras del Tribunal “La cuestión consiste en determinar, desde la perspectiva de los referidos derechos fundamentales, la licitud constitucional de una resolución judicial que ordena a la Administración penitenciaria dar asistencia médica obligatoria y en especial alimentar incluso contra su voluntad a los recurrentes cuando, como consecuencia de la huelga de hambre que siguen, se vea en peligro su vida, aunque excluyendo en todo caso la alimentación por vía bucal mientras se matengan conscientes”.

En última instancia, como hemos apuntado antes, la cuestión se pudo centrar sobre la obligación deontológica, y por extensión legal de la Administración, de suministrar los cuidados indispensables a personas cuyo único padecimiento es precisamente la renuncia a esos cuidados; es decir, la muerte por deshidratación e inanición. En este sentido, cuando se pierde la capacidad de ejercer esa voluntad por la decisión del propio sujeto, como es este caso de la huelga de hambre, probablemente el suministro no traumático del soporte vital necesario no es idéntico a la alimentación forzosa que se nos describe en las historias carcelarias del totalitarismo. Quizás ésa hubiese sido una mejor solución que la abordada por el Tribunal.

SENTENCIA 120/1990, DE 27 DE JUNIO

Pleno: Tomás y Valiente, Rubio Llorente, Truyol Serra, *García-Mon y González-Reguer* (ponente), de la Vega Benayas, *Díaz Eimil* (ponente), Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Leguina Villa, López Guerra, De los Mozos y de los Mozos, Rodríguez Bereijo y *Gimeno Sendra* (ponente).

Fundamentos:

2. (...) los recurrentes que cumplen condena en el Centro Penitenciario de Preventivos Madrid-2, se encuentran actualmente ingresados en Centros Hospitalarios de esta capital, a resultas de su negativa a ingerir alimentos adoptada con el fin de obtener de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que disponga la concentración en un único establecimiento de los reclusos que, como los demandantes, pertenezcan a los autodenominados “Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre” (“GRAPO”).

3 (...)

(...)

(...) frente a una resolución judicial que no se ciñe a autorizar a la Dirección del Centro penitenciario en el que los recurrentes cumplen condena a disponer el recurso de alimentación forzosa como única medida a aplicar en la situación creada por la huelga de hambre, sino que, antes al contrario, tiene un contenido más amplio, pues establece el “derecho-deber” de prestar asistencia médica a los internos, y, para el caso de que dicha asistencia conlleve la alimentación por vía bucal, el respeto a la voluntad mientras permanezcan en “estado de determinarse libre y conscientemente”.

4 (...)

(...) la presunta vulneración del art. 1.1 CE, en cuanto consagra la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico. Es indudable que muchos de los derechos fundamentales y libertades públicas tutelables en amparo son proyecciones del valor libertad, pero sólo estas proyecciones concretas crean derechos amparables en esta vía procesal.

(...)

(...) otro tanto cabe decir en relación con la supuesta infracción, por violación de la dignidad de la persona, del art. 10.1 C.E (...).

5 (...)

(...)

(...) debemos destacar de manera expresa que la intervención médica forzosa, por los valores humanos que en ella se implican, constituye un tema de

excepcional importancia que irradia sus efectos a distintos sectores del ordenamiento jurídico, especialmente al constitucional y al penal, y trasciende del campo de lo jurídico para internarse en el mundo de la axiología, en el que afecta a creencias y sentimientos profundamente arraigados en la conciencia del ser humano, suscitando polémica doctrinal, muy variada y a veces irreconciliable, en la que están en juego concepciones distintas del sentido de la vida humana (...).

6.(...)

Con esa huelga de hambre reivindicativa y su oposición a recibir asistencia médica, los miembros del grupo en cuestión colocan a la Administración ante la alternativa de revocar la medida administrativa contra la cual dirigen su protesta o presenciar pasivamente su muerte, planteando así un conflicto que esencialmente se produce entre el supuesto derecho de los huelguistas al ejercicio de su derecho de libertad hasta el extremo, incluso de ocasionar su propia muerte, sin injerencia ajena alguna, y el derecho-deber de la Administración penitenciaria de velar por la vida y salud de los internos sometidos a su custodia (...).

(...)

Aunque el concepto de relación especial de sujeción es de por sí impreciso (STC 61/1990), no puede ponerse en duda que la reclusión en un centro penitenciario origina una relación jurídica de esa naturaleza (...) y así se desprende directamente de la propia Constitución, cuyo art. 25.2, en atención al estado de reclusión en que se encuentran las personas que cumplen penas de privación de libertad, admite que los derechos constitucionales de estas personas puedan ser objeto de limitaciones que no son de aplicación a los ciudadanos comunes y, entre ellas, las que se establezcan en la ley penitenciaria (...).

(...)

7. El derecho fundamental a la vida, en cuanto derecho subjetivo, da a sus titulares la posibilidad de recabar el amparo judicial (...) frente a toda actuación de los poderes públicos que amenace su vida o su integridad. De otra parte y como fundamento objetivo del ordenamiento impone a esos mismos poderes públicos y en especial al legislador, el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger esos bienes, vida e integridad física, frente a los ataques de terceros, sin contar para ello con la voluntad de sus titulares e incluso cuando ni siquiera quepa hablar, en rigor, de titulares de ese derecho (STC 53/1985).

Tiene, por consiguiente, el derecho a la vida un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte. Ello no impide, sin embargo, reconocer que, siendo la vida un bien de la persona que se integra en el círculo de su libertad, pue-

da aquélla fácticamente disponer sobre su propia muerte, pero esa disposición constituye una manifestación del *agere licere*, en cuanto que la privación de la vida propia o la aceptación de la propia muerte es un acto que la ley no prohíbe y no, en ningún modo, un derecho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público para vencer la resistencia que se oponga a la voluntad de morir, ni, mucho menos, un derecho subjetivo de carácter fundamental en el que esa posibilidad se extienda incluso frente a la resistencia del legislador, que no puede reducir el contenido esencial del derecho.

En virtud de ello, no es posible admitir que la Constitución garantice en su art. 15 el derecho a la propia muerte y, por consiguiente, carece de apoyo constitucional la pretensión de que la asistencia médica coactiva es contraria a ese derecho constitucionalmente inexistente.

Además, aunque se admitiese la tesis de los recurrentes, tampoco podría apreciarse que, en el caso contemplado, se produce vulneración de ese pretendido derecho a disponer de la propia vida, puesto que el riesgo de perderla que han asumido no tiene por finalidad causarse la muerte, sino la modificación de una decisión de política penitenciaria que tratan de obtener incluso a expensas de su vida.

(...)

Una vez establecido que la decisión de arrostrar la propia muerte no es un derecho, sino simplemente manifestación de libertad genérica, es oportuno señalar la relevancia jurídica que tiene la finalidad que persigue el acto de libertad de oponerse a la asistencia médica, puesto que no es lo mismo usar de la libertad para conseguir fines lícitos que hacerlo con objetivos no amparados por la Ley, y, en tal sentido, una cosa es la decisión de quien asume el riesgo de morir en un acto de voluntad que sólo a él afecta, en cuyo caso podría sostenerse la ilicitud de la asistencia médica obligatoria o de cualquier otro impedimento a la realización de esa voluntad, y cosa bien distinta es la decisión de quienes, hallándose en el seno de una relación especial penitenciaria, arriesgan su vida con el fin de conseguir que la Administración deje de ejercer o ejerza de distinta forma potestades que le confiere el ordenamiento jurídico; pues, en este caso, la negativa a recibir asistencia médica sitúa al Estado, en forma arbitraria, ante el injusto de modificar una decisión, que es legítima mientras no sea judicialmente anulada, o contemplar pasivamente la muerte de personas que están bajo su custodia y cuya vida está legalmente obligado a preservar y proteger.

Por consiguiente, todo lo que dejamos expuesto nos conduce a la conclusión de que, desde la perspectiva del derecho a la vida, la asistencia médica obligatoria autorizada por la resolución judicial recurrida no vulnera dicho derecho fundamental, porque en éste no se incluye el derecho a prescindir de la

propia vida, ni es constitucionalmente exigible a la Administración penitenciaria que se abstenga de prestar una asistencia médica que, precisamente, va dirigida a salvaguardar el bien de la vida que el artículo 15 de la Constitución protege.

8. Este mismo precepto constitucional garantiza el derecho a la integridad física y moral, mediante el cual se protege la inviolabilidad de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular.

Por ello, este derecho constitucional resultará afectado cuando se imponga a una persona asistencia médica en contra de su voluntad, que puede venir determinada por los más variados móviles y no sólo por el de morir y, por consiguiente, esa asistencia médica coactiva constituirá limitación vulneradora del derecho fundamental, a no ser que tenga justificación constitucional.

(...)

(...) la necesidad de cohonestar el derecho a la integridad física y moral de los internos en un Centro penitenciario y la obligación de la Administración de defender su vida y salud, como bienes también constitucionalmente protegidos, encuentra en la resolución judicial recurrida una realización equilibrada y proporcionada que no merece el más mínimo reproche, puesto que se limita a autorizar la intervención médica mínima indispensable para conseguir el fin constitucional que la justifica, permitiéndola tan sólo en el momento en que, según la ciencia médica, corra “riesgo serio” la vida del recluso y en la forma que el Juez de Vigilancia Penitenciaria determine, prohibiendo que se suministre alimentación bucal en contra de la voluntad consciente del interno.

9. El propio art. 15 de la Constitución prohíbe la tortura y los tratos inhumanos y degradantes; pero esta prohibición no puede estimarse que haya sido quebrantada por la asistencia médica cuya autorización judicial se recurre.

(...)

(...) también con referencia al medio carcelario, este Tribunal tiene dicho que para apreciar la existencia de tratos inhumanos o degradantes es necesario que “éstos acarreen sufrimientos de una especial intensidad o provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel determinado, distinto y superior al que suele llevar aparejada la imposición de condena” (...).

10. Tampoco puede apreciarse vulneración de la libertad ideológica que garantiza el art. 16.1 de la Constitución.

(...)

(...) para que los actos de los poderes públicos puedan ser anulados por violaciones de la libertad ideológica reconocida en el art. 16.1 CE es cuando

menos preciso, de una parte, que aquéllos perturben o impidan de algún modo la adopción o el mantenimiento en libertad de una determinada ideología o pensamiento (...). De otra, se exige que entre el contenido y sostenimiento de éstos y lo dispuesto en los actos que se combatan quepa apreciar una relación de causalidad suficiente para articular la imputación del ilícito constitucional.

(...)

(...) aun reconociendo el trasfondo ideológico que late en la huelga de hambre de los recurrentes, es innegable que la asistencia médica obligatoria a los presos en huelga que se encuentren en peligro de perder la vida no tiene por objeto impedir o poner obstáculos a la realización y mantenimiento de la huelga (...), sino que va encaminada exclusivamente a defender la vida de los reclusos en huelga, al margen de todo propósito de impedir que éstos continúen en su actitud reivindicativa.

11. No es tampoco pertinente encuadrar el problema en el ámbito del art. 17.1 de la Constitución (...), dado que (...) la libertad personal protegida por este precepto es la “libertad física”. La libertad frente a la detención, condena o internamientos arbitrarios, sin que pueda cobijarse en el mismo una libertad general de actuación o una libertad general de autodeterminación individual, pues esta clase de libertad, que es un valor superior del ordenamiento jurídico —art. 1.1 de la Constitución—, sólo tiene la protección del recurso de amparo en aquellas concretas manifestaciones a las que la Constitución les concede la categoría de derechos fundamentales (...).

Conforme, pues, con dicha doctrina, la libertad de rechazar tratamientos terapéuticos, como manifestación de la libre autodeterminación de la persona no puede entenderse incluida en la esfera del art. 17.1 de la Constitución.

12. Igualmente inconsistente es la denuncia de la supuesta violación del derecho a la intimidad personal (art. 18.1 CE y 5.2 RP).

Es cierto que este Tribunal ha reconocido que en la noción de “intimidad personal” se integra la “intimidad” corporal (STC 37/1989, fundamento jurídico 4.º). Pero la ha identificado únicamente como “inmunidad frente a toda indagación o pesquisa que sobre el cuerpo quisiera imponerse contra la voluntad de la persona” (...), pues, aparte de que la intervención médica autorizada por la resolución impugnada no puede incluirse cabalmente entre las indagaciones o pesquisas a las que, de acuerdo con la doctrina constitucional citada, puede oponerse el derecho a la intimidad, no produce la actuación impugnada ni por las partes del cuerpo sobre las que actúa ni por los medios a emplear, ni por su finalidad ajena a la adquisición de conocimientos sobre el cuerpo de los reclusos, menoscabo de ningún género de su intimidad personal.

Fallo:

Denegar el amparo solicitado por don Sebastián Rodríguez Veloso, don Leoncio Calcerrada Forniellas y don Luis Cabeza Mato.

Voto particular que formula el Magistrado don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer

1 (...).

El fondo del asunto que plantea el presente recurso de amparo es un caso límite (...) en el que la diversidad y la contraposición de posturas en la doctrina se corresponden con la evolución vacilante y acelerada de la deontología médica en relación con la voluntariedad de los tratamientos terapéuticos y los derechos fundamentales del enfermo. El enjuiciamiento estrictamente jurídico del tema, que es el que a este Tribunal corresponde, resulta además dificultado porque la Constitución no ha tomado postura de forma directa sobre el particular, ni tampoco existe en nuestro ordenamiento una regulación legal del supuesto, lo que ha obligado a los órganos judiciales a una importante labor creativa de ponderación de los valores y derechos constitucionales en juego, que es la que también ha tenido que realizar el Tribunal llegando a una solución razonada, que, sin embargo, no comparto.

2. La razón principal de mi discrepancia es la que, según la opinión mayoritaria del Pleno, la relación de sujeción especial del penado y, más genéricamente del interno, frente a la Administración Penitenciaria justificaría la imposición, que habría de calificar de “especial”, de una limitación a derechos fundamentales como la que supone la alimentación forzosa, limitación que se reconoce que no sería lícita “si se tratara de ciudadanos libres o incluso de internos que se encuentren en situaciones distintas” (...).

El art. 25.2 CE se remite a la Ley Penitenciaria (...). El silencio de la Ley sólo puede ser interpretado, también a la luz del art. 25.2 CE, como el reconocimiento de que en esta materia la situación del penado o del interno no ha de sufrir restricción alguna de sus derechos respecto a la situación de cualquier otro ciudadano en libertad.

3. Además, no me parece convincente el argumento adicional utilizado para negar la “libertad” de los recurrentes de oponerse a la asistencia médica obligatoria durante el ejercicio de su huelga de hambre, y consistente en contraponer la “libertad para conseguir fines lícitos” respecto del uso de esa libertad en relación con “objetivos no amparados por la ley” (...). Esta afirmación puede ser entendida en el sentido de que esa negativa a recibir asistencia médica sería legítima si el huelguista persiguiera objetivos amparados por la ley

(...). Ello significaría condicionar la decisión de imponer la alimentación forzosa a la propia legitimidad del fin perseguido por la huelga de hambre. Por su propia lógica. La huelga de hambre persigue objetivos que no pueden obtenerse normalmente a través de las vías judiciales. Por otro lado, aparte de la dificultad de la valoración de la legitimidad del objetivo perseguido, el que esa legitimidad haya de ser tenida en cuenta en la decisión judicial supone traspasar la cuestión del plano de la ponderación de la vida y la salud como bienes constitucionales protegidos frente a otros derechos y bienes constitucionales, al plano de la reivindicación misma perseguida por los recurrentes, e interferirse en el medio de presión utilizado.

4. Finalmente, aunque la alimentación forzosa persiga evidentemente un objetivo humanitario, de salvaguardia de la vida y la salud, tal objetivo sólo puede realizarse si se trata de una medida transitoria, puesto que si se prorroga indefinidamente, en la medida en que permanezca la situación de huelga de hambre, no garantiza la realización de ese objetivo y provoca un alargamiento innecesario de la degradación física y psíquica de la persona implicada, mantenida artificialmente en vida en condiciones tan precarias que pueden llegar a ser inhumanas. Por ello, la solución adoptada por la resolución judicial impugnada, no puede mantenerse indefinidamente sin colocar a la persona en una situación degradante y contraria a su dignidad humana.

Por todo ello, opino que aunque ninguna de las alternativas que se ofrecían era satisfactoria, partiendo de sus propios razonamientos de libertad de tratamiento médico del ciudadano en régimen de libertad, la Sentencia debería haber llegado a la conclusión de estimar el amparo, confirmando, en consecuencia, la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Voto particular que formula el Magistrado don Jesús Leguina Villa

Coincido con muchas de las cosas que se dicen en esta Sentencia y, sobre todo, comparto la preocupación y la sensibilidad que en la misma se manifiesta por defender la vida en un caso límite de conflicto entre los poderes públicos y quienes nos piden amparo. Me veo, sin embargo, en la necesidad de expresar en conciencia mi disenso con la decisión mayoritaria (...).

(...) No estando en juego derechos fundamentales de terceras personas, ni bienes o valores constitucionales que sea necesario preservar a toda costa, ninguna relación de supremacía especial –tampoco la penitenciaria– puede justificar una coacción como la que ahora se denuncia que, aun cuando dirigida a cuidar la salud o a salvar la vida de quienes la soportan, afecta al núcleo esencial de la libertad personal y de la autonomía de la voluntad del individuo (...). Se afirma con razón en la Sentencia que el derecho a la vida no puede ser con-

fundido con un pretendido derecho a morir o a decidir sobre la propia muerte. Pero ello no significa que no se tenga derecho –sea cual sea la circunstancia en la que uno se encuentre y estando en el pleno uso de las facultades mentales– a que nadie que no sea uno mismo decida e imponga coactivamente lo que haya de hacerse para conservar la salud (...).

La Sentencia niega que la alimentación forzosa o la asistencia sanitaria coactiva límite la libertad personal de los recurrentes. Mi opinión es contraria (...). (...) ningún valor justificativo tiene, según creo, ni el deber que la Administración penitenciaria tiene de velar por la salud y la integridad física de los internos ni tampoco la supuesta ilicitud del ayuno voluntario como medio reivindicativo o de presión frente a dicha Administración penitenciaria. Este último aspecto es indiferente o irrelevante para resolver el conflicto, pues lo que importa no es saber si la llamada huelga de hambre reivindicativa en que se encuentran los recurrentes es o no ilícita (o si lo son como se dice en la Sentencia, los objetivos que con la misma se pretenden conseguir, cuestión ésta harto discutible); lo esencial es saber si es lícito forzar la voluntad de unas personas, libremente expresada, y coartar su libertad física para imponerles una alimentación o un tratamiento médico que rechazan. (...) este deber de velar por la salud y la integridad física de los reclusos termina frente a la renuncia del recluso enfermo a su derecho a recibir protección y cuidados médicos (...).